Reconsideración.

Exma. Corte

Patricio Aylwin, en los autos del recurso de amparo contra la detención y expulsión arbitraria de Don Renán Fuentealba Moena, a V.E. digo:

V.E. ha confirmado la resolución denegatoria del amparo de autos, sin otro fundamento que la copia del decreto del Interior Nº 1950, de 26 de Noviembre último, que ordenó la expulsión contra la cual se reclama.

En alegaciones escritas y verbales, la defensa del recurso hizo presentes los siguientes hechos:

1) Que el referido Decreto, que conforme al art. 21 en que se apoya debe ser fundado, carece de toda fundamentación. La doctrina jurídica universal, consagrada en Chile tanto por la legislación como por la jurisprudencia, entiende que la "fundamentación" de un acto exige "la exposición de las razones que han movido a la Administración a tomar el acuerdo en que el acto consiste" y obliga a declarar "cuales son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a su emanación", de modo que "la omisión de los motivos llegue a ser el índice de su ilegalidad". Notando los fundamentos o motivos indicados en el texto del Decreto con las circunstancias que la Ley contempla como justificativos del acto contenido en ese Decreto, se puede objetivamente verificar si dicho acto es legal o importa un abuso o desviación de poder, es decir, el empleo de atribuciones legales para fines ajenos a los queridos por la Ley.

El Decreto 1950 se limita a afirmar, como único antecedente, que "el señor Renán Fuentealba Moena constituye un peligro para la seguridad interior del Estado en virtud de los antecedentes que obran en poder de este Ministerio".

Eso no constituye de manera alguna una fundamentación racional del acto y si algún Tribunal fundara de esa manera una sentencia, V.E. no vacilaría en anularla por falta de fundamentación adecuada.

Como enseña la doctrina, "la exposición de las razones por las cuales se hace algo es un elemento mínimo a exigirse de una conducta racional en un Estado de Derecho". Lo que aún en una legislación tan autoritaria como la española de 1947, obliga a motivar, "con suscita relación de hechos y fundamentos de derecho", todos los actos que "limiten derechos subjetivos", exigencia que los juristas de ese país derivan de una norma de 1913, según la cual "todo acuerdo administrativo debe contener necesariamente la relación de los hechos que lo originan y los fundamentos de derecho en que se apoya, tanto para conocimiento de la Administración en ulteriores actuaciones y de los mismos interesados para poder formular el correspondiente recurso, como por resultar inmorale e improcedente denegar una solicitud o denegar una propuesta sin alegar razón o justificación alguna".

A mayor abundamiento, es público y notorio que el Gobierno, por declaraciones públicas de 26 y 28 de Noviembre pasado, emanadas del Ministerio del Interior, invocó ante el país como único fundamento de la resolución adoptada contra Fuentealba el texto del cable con que la agencia France Presstrasmirió al exterior unas declaraciones suyas, hecho que en esas oportunidades movió al Gobierno a acusar a su autor de haber "desafiado a la autoridad, comprometido el prestigio de Chile en el exterior e intentado alterar la paz interna"; pero no de "ser un peligro para la seguridad interior del Estado".

2) Que este único motivo invocado en el Decreto de expulsión: que Fuentealba sería "un peligro para la seguridad interior del Estado", no concuerda con las exigencias del D.L. 81, que sólo autoriza la expulsión "cuando así lo requieran los altos intereses de la seguridad del Estado", lo que supone una lesión o amenaza de extraordinaria gravedad, cosa que el acto de expulsión ni siquiera insinúa;

3) Que el Decreto de expulsión, fechado el 26 de Noviembre de 1974, fué cumplido ese mismo día, según declaración oficial del Ministerio del Interior, no obstante que sólo fué tramitado en la Contraloría General de la República mediante su "toma de razón" al día siguiente, lo que constituye una flagrante violación de lo dispuesto en la ley Orgánica de Ministerios (D.F.L. 7912 de 20 de Noviembre de 1927) y en los arts. 13 y 33 de la Ley 10.336 Orgánica de la Contraloría General de la República;

4) Que no obstante la terminante disposición del art. 2 del D.L. 81 en cuanto a que "los que sean objeto de las medidas de expulsión o abandono del país, podrán elegir libremente el lugar de su destino", al señor Renán Fuentealba no se le dió la menor oportunidad de hacerlo y ni siquiera se le notificó la medida de que era objeto; simplemente fué "consignado" -para emplear la palabra usada en estrados por el abogado del Gobierno- en calidad de bulto hacia el extranjero; y

5) Que el Decreto de expulsión, dispuesto según se expresa en su texto por el Jefe del Estado, NO LLEVA SU FIRMA como necesariamente debía ocurrir en virtud de lo dispuesto en la ley orgánica de Ministerios y en los Decretos Leyes del actual Gobierno Nros. 9, 128 y 527. Conforme a esos preceptos, los únicos Decretos Supremos en que se puede omitir la firma del Jefe de Estado son los que Ley Nº 16.436 autoriza taxativamente para ser suscritos sólo por el o los Ministros respectivos "por orden del Presidente", cosa que no ocurre tratándose de la expulsión de un chileno del territorio nacional.

Oportunamente se hizo presente a V.E. que ninguno de estos hechos, invocados por la defensa de mi parte, fué objeto del menor examen en la sentencia de primera instancia que rechazó el recurso. Y se representó a V.E., respetuosa pero claramente, el deber que imperativamente la Ley le impone, que la razón reclama y la más elemental justicia exige, de hacerse cargo de estos hechos y valorizarlos con arreglo a derecho en la fundamentación de su sentencia.

¡Con perplejidad y pena inocultables, advierto que V.E. ha rehuido esa obligación elemental de todo juez!

Como hombre formado en la fe en el derecho y en el respeto a los Tribunales de Justicia -hijo de un magistrado que presidió ese Exmo. Tribunal, abogado por más de treinta años, Profesor de Derecho por más de veinte, legislador y Presidente del Senado de nuestra República-, no me resigno a aceptar que el más alto Tribunal de mi Patria -de tan vigorosas tradiciones jurídicas- proceda de manera tan inconsecuente con su historia y jerarquía.

Por ello solicito reconsideración de lo que ha resuelto, para que con mayor y mejor análisis, revoque la resolución apelada y acoja el amparo que he interpuesto en favor de Don Renán Fuentealba, o al menos se sirva exponer -para conocimiento de los hombres- las razones de hecho y de derecho que sirven de fundamento a su decisión denegatoria.

A V.E. ruego, al pronunciarse sobre esta reconsideración, tener presente, además, los siguientes antecedentes:

I.- Los hechos.

Renán Fuentealba fué sacado de su oficina el 26 de Noviembre a las 7 de la tarde por cuatro funcionarios de Investigaciones que dijeron tener orden del Gobierno para detenerlo. Dos horas y media después era embarcado en calidad de bulto, sin pasaporte ni documento alguno, en un avión LAN con destino a Panamá. No se le permitió comunicarse con su familia, ni siquiera recoger ningún efecto personal.

¿De qué delito se le acusa?

Según los remitidos públicos del Ministerio del Interior de 26 y 28 de Noviembre pasados, de haber hecho declaraciones a una agencia extranjera que "desafiaban a la autoridad, comprometían al prestigio de Chile en el exterior e intentaban alterar la paz interna".

¿En mérito de qué se formuló esa acusación?

Con el sólo mérito de un cable enviado al exterior por la Agencia France Presse, que contiene una versión periodística de la entrevista que Fuentealba concedió a un empleado de esa agencia. Fuentealba negó desde Lima, tan pronto llegó ahí, la exactitud de esa versión, y pidió que se publicara el texto íntegro de las preguntas que se le formularon y de sus respuestas. Como ni la Agencia ni el Gobierno no consintieron en hacerlo, lo hizo su familia mediante inserción en El Mercurio. Pero el Gobierno, sin oír a Fuentealba ni conocer su versión sobre los hechos, ateniéndose exclusivamente a la versión del señor Kaufmann, dió por establecido que el texto original de la entrevista había sido modificado con la aceptación de Fuentealba.

Es decir, las afirmaciones de un periodista extranjero, recién llegado a Chile, son aceptadas como plena prueba, mientras ni siquiera se oye a don Renán Fuentealba Moena, nacido, educado y recibido de abogado en Chile, con más de treinta años de profesión, que ha sido regidor, diputado y senador, que ha representado a Chile ante las Naciones Unidas y la CEPAL, que por seis veces ha presidido el Partido Político más importante del país, que ha sido profesor en el Liceo de Illapel, en el Colegio San Luis de Antofagasta y en el Seminario de La Serena, y que no hace aún dos años, presidía la Confederación de Partidos Democráticos de Chile, en la dura lucha por defender nuestro régimen institucional contra el totalitarismo que entonces lo amenazaba.

¿Cómo se justifica tan manifiesta injusticia?

Atribuyendo a Renán Fuentealba, a posteriori y cuando no puede defenderse, toda clase de actuaciones censurables: desde comitancia con el MIR hasta "traición a la Patria" -según las palabras del abogado del Gobierno-. Pero como esas burdas acusaciones son falsas y ridículas, no se invoca ningún hecho concreto para justificarlas ni prueba alguna de su verdad.

En resumen, Fuentealba fué expulsado de Chile lo mismo que Solyenitsin de Rusia: por mera decisión de la autoridad administrativa, mediante la fuerza policial, sin ser juzgado ni siquiera oído y por el sólo delito de expresar su pensamiento. Y luego, también al igual de lo ocurrido a Solyenitsin, se le denigra como antipatriota y con otras acusaciones mendaces, sin derecho a defenderse. Es decir -según las palabras del Código Penal, se "añade la ignominia a los efectos propios del hecho".

II.- El derecho.

En reiterados documentos, especialmente en su Declaración de Principios emitida el 11 de Marzo último y en su "Declaración Pública sobre los Derechos Humanos" publicada el 12 de Junio pasado, el Gobierno ha protestado su respeto por el "orden jurídico", por el "Estado de Derecho" y por los "derechos fundamentales de la persona humana". Por su parte, el señor Presidente de la Exma. Corte Suprema creyó necesario, en ocasión solemne, dar fe pública que en Chile impera un "Estado de Derecho".

Lo esencial en la concepción de un Estado de Derecho es que éste no puede proceder sino "según reglas jurídicas establecidas, reglas que a su vez solo de una manera jurídica pueden ser modificadas. Estas reglas contienen en sí la obligación de los órganos del Estado, con lo cual queda sometida a obligación la actividad de aquel en sí mismo, ya que la de los órganos del Estado lo es de este mismo, que no puede realizar una actividad que no esté realizada mediante un órgano. Ofrece esta regla, además, a los súbditos, la seguridad de que los órganos del Estado quedan obligados a proceder según la regla" (Georg Jellinek, "Teoría General del Estado, traducción de Fernando de los Ríos, Editorial Albatros, Buenos Aires, pág. 276).

Lo cual entraña, entre otras, dos consecuencias ineludibles:

a) si el Gobierno quiere ser consecuente con sus protestas de sujeción al Estado de Derecho, debe someter su propia conducta a las reglas jurídicas preestablecidas; y

b) si el Poder Judicial verdaderamente cree que en Chile impera un Estado de Derecho, debe ejercer sus atribuciones para asegurar que las reglas jurídicas sean efectivamente cumplidas.

Ahora bien: el caso de don Renán Fuentealba revela el más completo menosprecio por las reglas jurídicas que rigen la conducta de los órganos del Estado. Baste los siguientes ejemplos para demostrarlo:

1.- Son principios esenciales de Derecho, consagrados en los arts. 11 y 80 de la Constitución Política del Estado, que "nadie puede ser condenado si no es juzgado legalmente y en virtud de una ley promulgada antes del hecho sobre que recae el juicio" y que "la facultad de juzgar las causas civiles y criminales pertenece exclusivamente a los Tribunales establecidos por la Ley", sin que ninguna otra autoridad pueda, "en caso alguno, ejercer funciones judiciales".

Sin embargo, Don Renán Fuentealba ha sido condenado sin ser juzgado ni siquiera oído. Lo ha sido sin invocar ley alguna que tipifique su conducta como delito ni permita aplicarle la pena de entranamiento. Lo ha sido por decreto gubernativo invadiendo funciones privativas de los Tribunales de Justicia.

2.- Para proceder contra Don Renán Fuentealba se dice que "constituye un peligro para la seguridad interior del Estado", o que sus declaraciones dañarían el prestigio de Chile o amenazarían la paz interior. Pero los hechos que ponen en peligro la seguridad interior del Estado, amenazan la paz interior o dañan el prestigio externo del país, constituyen delitos expresamente tipificados y castigados, con distintas y severas penas, en el Código Penal y en la Ley 12.927 sobre Seguridad del Estado.

El respeto al orden jurídico, al Estado de Derecho y a las prerrogativas del Poder Judicial habrían exigido, si tales cargos

existieran contra don Renán Fuentealba, que se hubiera iniciado en su contra el correspondiente proceso para que los Tribunales de Justicia lo juzgaran y castigaran con arreglo a las citadas leyes.

3.- Se agrega que don Renán Fuentealba habría vulnerado las normas sobre receso político establecidas en el D.L. 78.- Pero precisamente otro D.L. el N° 436, tipificó esa infracción como delito, señalándole una pena cuya aplicación expresamente encomendó a los Tribunales de Justicia y sujetó al procedimiento previsto en Ley sobre Seguridad del Estado.

¿Por qué, si existía este cargo contra el señor Fuentealba, no se requirió en su contra el correspondiente proceso con arreglo a ese D.L. dictado por el propio Gobierno?

4.- En vez de usar los procedimientos jurídicos precedentemente expuestos, el Gobierno procede con Fuentealba del mismo modo que la Unión Soviética con Soljenitsin: lo expulsa administrativamente del país. Para hacerlo se funda en las atribuciones que a sí mismo se otorgó por el D.L. 81; pero -como ya vimos- no cumple las formalidades establecidas en ese propio texto: no fundamenta debidamente el decreto de expulsión, omite en él la firma del Jefe del Estado, lo cumple antes de su tramitación legal, no da al afectado oportunidad para elegir el lugar de su destino.

5.- Pero hay más: ese D.L. 81 es claramente inconstitucional. En sus Decretos Leyes N°s. 1, 9, 128 y 527, el Gobierno ha expresado su sujeción al "ordenamiento jurídico contenido en la Constitución y en las Leyes de la República", el que según expresa disposición del art. 2 del citado D.L. 128, "continúa vigente mientras no sea o haya sido modificado en la forma prescrita" por el art. siguiente del mismo texto. Este, a su vez, dispone que "los decretos leyes que modifiquen la Constitución Política del Estado formarán parte de su texto y se entenderán incorporados a ella".

Ahora bien: El D.L. 81, que no modificó ningún precepto de la Constitución Política, ni formó parte de su texto, ni ha sido incorporado a ella, la viola manifiestamente:

a) porque establece una pena y faculta al Ejecutivo para imponerla, lo que vulnera los arts. 12 y 80 de la Carta Fundamental; y

b) porque si la expulsión del territorio nacional que autoriza no se considerara pena, sino restricción de la libertad personal, ella excede los límites que los arts. 10 N° 15 y 44 N° 12 de la Constitución Política establecen para tales restricciones.

En el recurso de inaplicabilidad que interpuse ante V.E. y que se encuentra en tramitación, está circunstanciadamente detallada la inconstitucionalidad a que me refiero.

6.- Es tan evidente esa inconstitucionalidad y, por consiguiente, la falta de base jurídica capaz de sustentar en un "Estado de Derecho" la medida adoptada contra el señor Fuentealba, que el Gobierno optó por sanearla mediante el D.L. 788, mediante el cual declara que todos los Decretos Leyes que vulneren la Constitución deben entenderse retroactivamente como modificaciones a la Constitución, aunque no hayan pasado a formar parte

de ella ni se hayan incorporado a su texto. Lo cual, en buen romance, significa:

a) que la Constitución deja de ser una regla suprema y superior a los poderes públicos y queda en un mismo plano jerárquico que todos los decretos-leyes;

b) que en lo que los decretos-leyes dictados precedentemente se refieren a materias penales, el D.L. 788 los hace aplicables retroactivamente a hechos ocurridos antes de su vigencia, con manifiesta violación del principio de la no retroactividad de la ley penal consagrado en el art. 11 de la Constitución Política;

c) que la independencia y atribuciones del Poder Judicial quedan supeditadas a cualquier decreto-ley y la prerrogativa que el art. 86 de la Carta Fundamental otorga a la Corte Suprema para declarar inaplicable cualquier precepto legal contrario a la Constitución es suprimida retroactivamente respecto de la legislación dictada durante más de un año.

Es decir, si hasta ahora se había cuidado de guardar cierta apariencia de respeto "al orden jurídico" y al "Estado de Derecho", mediante este D.L. 788 el Gobierno asume la totalidad del poder público por encima de toda norma, proclama como única fuente de derecho su sola voluntad y consiguientemente, se auto libera a sí mismo de toda obligación de proceder "según reglas jurídicas establecidas".

En el referido recurso de inaplicabilidad, demostramos circunstanciadamente cómo y por qué este D.L. 788 es, también, burdamente inconstitucional. Aceptarlo, significaría aceptar la abolición del régimen jurídico y del Estado de Derecho en Chile.

El profesor inglés Karl Loewenstein, en su obra "Teoría de la Constitución" (Ediciones Ariel, Barcelona, 1964, pág. 76), señala cómo estas características del llamado "régimen autoritario" implican la absoluta negación del Estado de Derecho y de las garantías o derechos constitucionales. Textualmente dice: "El concepto autoritario caracteriza una organización política en la cual un único detentador del poder -una sola persona o dictador, una asamblea, un comité, una junta, o un partido- monopoliza el poder político sin que les sea posible a los destinatarios del poder una participación real en la formación de la voluntad estatal. El único detentador del poder impone a la comunidad su decisión política fundamental, esto es, la dicta a los destinatarios del poder. El término autoritario se refiere más a la estructura gubernamental que al orden social. En general, el régimen autoritario se satisface con el control político del Estado sin pretender dominar la totalidad de la vida socio-económica de la comunidad, o determinar su actitud espiritual de acuerdo con su propia imagen. La exclusión de los destinatarios del poder de la participación en el proceso político no es incompatible con la existencia de otros órganos estatales junto al su premo detentador del poder, especialmente de una asamblea o de tribunales. Pero es característico del régimen autoritario que estos órganos separados, o bien están sometidos al control total del único detentador del poder, o en caso de conflicto con éste están obligados a ceder ..."

III.- Lo que está en juego.-

De lo expuesto fluye que lo que está en juego en este caso y depende de la decisión de V.E. es mucho más que la situación particular de don Renán Fuentealba, de por sí injusta y digna de consideración.

Es mucho más, aún, que el derecho de cualquier chileno a vivir en el territorio de su patria y a gozar de las libertades que le garantizan el art. 10 de la Constitución Política del Estado, la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica de 1969, documentos ambos suscritos por Chile.

Lo que está en juego es, ni más ni menos, que la vigencia en Chile de un orden jurídico obligatorio para gobernantes y gobernados y de un Poder Judicial independiente, conforme a la concepción de "Estado de Derecho" aceptada por la tradición jurídica de nuestra Patria desde los albores de la República.

La resolución de V.E. cuya reconsideración solicito, que se limita a dar por buena la expulsión de un chileno del territorio patrio con el sólo mérito del decreto administrativo que la ordena, es decir, por la sola razón de que la autoridad que la dispuso se atribuye a sí misma la facultad de hacerlo, sin entrar a ningún examen del fundamento de tal supuesta atribución, ni de su conformidad con el ordenamiento jurídico general del país y en especial con la Constitución Política del Estado; ni siquiera del cumplimiento de las exigencias formales que pudiera requerir para su ejercicio, significa -lisa y llanamente- reconocer como "derecho" la sola "voluntad de los gobernantes", es decir, admitir la abolición en nuestro país del Derecho, entendido como "norma general obligatoria".

Con sobrada razón preocupa al Gobierno y debe preocuparnos a todos los chilenos, la mala imagen internacional de nuestro país con respecto al respeto al orden jurídico y a los derechos humanos. La gigantesca campaña desencadenada contra Chile por sectores de inspiración marxista, encuentra eco en todo el mundo, incluso en sectores muy contrarios a esa ideología y de la más firme convicción democrática. Ello constituye un grave daño y un serio peligro para nuestra Patria.

¿Qué debemos hacer, como chilenos y como hombres de derecho?

Quienquiera que medite seriamente el asunto, admitirá que no basta con negar las muchas falsedades con que se difama a Chile; es preciso, también, corregir los hechos que puedan darle credibilidad a los ojos del mundo.

¡Por que si creemos en la verdad, debemos empezar por serle fieles!

Malo es para Chile que se diga que aquí se desconoce el orden jurídico y se vulneran los derechos humanos; pero si ello ocurre, lo malo no es que se diga, lo malo es que se haga.

Deber de todos es evitarlo, en la medida de lo posible y en la esfera propia de sus facultades.

Como chileno, como jurista, como demócrata, asumo el deber, que mi conciencia me impone, de representar a V.E. -única autoridad que podría actuar eficazmente para evitarlo- el grave peligro de destrucción total a que está abocado el orden jurídico de nuestra Patria en su esencia misma.

IV.- El derecho y la noble función judicial.-

Desde la Carta Magna, los Tribunales de Justicia tienen la sagrada misión de defender la libertad de las personas cuando es amagada arbitrariamente.

En Chile, esta misión le fué atribuida a la Corte Suprema, desde los albores de la República, al encomendarle el art.146 de la Constitución de 1923 "proteger", hacer cumplir y reclamar a los otros Poderes por las garantías individuales y judiciales". Las Cartas Fundamentales de 1833 y 1925 confirmaron esa atribución en el Poder Judicial, al encomendarle el amparo de la libertad de los habitantes de la República. Y así lo entendió expresamente la Ley Orgánica de Tribunales, hoy Código Orgánico de Tribunales, al conferirle las "facultades conservadoras" a que se refiere en su art. 3.

Pero a V.E. no sólo está confiada la tutela y amparo de los derechos subjetivos individuales. También le corresponde, en último término, proteger la vigencia del "derecho objetivo", tanto en la esfera civil y penal -de manera general- como también excepcionalmente en la propia esfera administrativa -mediante el ejercicio de las atribuciones que la Constitución y las leyes le otorgan, especialmente por la vía de los recursos de amparo, de casación, de queja y de inaplicabilidad de preceptos inconstitucionales.

A través de su historia, V.E. ha sido generalmente celosa y altiva en el ejercicio de estas nobles tareas, entendiéndolas como un deber sagrado e ineludible que la Patria le ha confiado. No hace aún dos años, representando al Gobierno de entonces el incumplimiento de un orden judicial, V.E. decía en su acuerdo unánime de 12 de Abril de 1973: "La Corte Suprema de Justicia, velando sin concesiones por el mantenimiento del orden jurídico, como es su obligación inquebrantable, observa con profunda inquietud las consecuencias que para la estabilidad de los derechos y la conservación del orden público producen actuaciones como las que denunciamos".

En reiteradas ocasiones, el actual Gobierno ha expresado solemnemente su disposición a someterse al Derecho y su respeto a la independencia y prerrogativas del Poder Judicial.

En su Declaración de Principios, se expresan entre otros los siguientes conceptos:

"El hombre tiene derechos naturales anteriores y superiores al Estado. Son derechos que arrancan de la naturaleza misma del ser humano, por lo que tienen su origen en el propio Creador. El Estado debe reconocerlos y reglamentar su ejercicio; pero no siendo él quien los concede, tampoco podría jamás negarlos ..."

"Un orden jurídico respetuoso de los derechos humanos: marco para el actual Gobierno: -Chile ha vivido siempre dentro de un orden jurídico. La majestad de la Ley ha estado invariablemente presente en nuestra evolución social. Pero además, ese orden jurídico ha sido siempre reflejo del aprecio profundo que el chileno siente por la dignidad espiritual de la persona humana y, consiguientemente, por sus derechos fundamentales ..."

De quienes han suscrito esos conceptos, no puede suponerse que rechacen el cumplimiento, por el Poder Judicial, de "su obligación inquebrantable" de velar "sin concesiones por el mantenimiento del orden jurídico".

Pero es tendencia natural de quienes detentan el poder tratar de ejercerlo sin límites. La realización de esa tendencia entraña la abolición del Derecho. El orden jurídico supone, necesariamente, el encauzamiento del ejercicio del poder dentro de normas obligatorias preestablecidas.

Los bellos conceptos recién reproducidos de la citada Declaración de Principios, son palabras vacías y suenan a burla cuando, con el pretexto de situaciones de emergencia, no se respetan en la realidad. Pero la historia enseña que nunca las situaciones de emergencia se prolongan indefinidamente y el Derecho prescribe que aún ellas quedan sometidas a ciertas reglas reguladoras, al ordenamiento jurídico. Ninguna situación de emergencia autoriza el imperio de la arbitrariedad, de la sola voluntad del que manda.

¡Nadie más y mejor que V.E. puede y debe contener los excesos o extralimitaciones que vulneran los derechos del hombre, anteriores y superiores al Estado: ¡Nadie más y mejor que V.E. puede y debe impedir las trasgresiones al orden jurídico! ¡Nadie más y mejor que V.E. puede y debe significar a quienes mandan los límites que el Derecho impone a los poderes de emergencia!

Lo que en definitiva ocurra en Chile con el Estado de Derecho, con el orden jurídico, con los derechos humanos, dependerá en gran medida de la sabiduría con que V.E. ejerza sus atribuciones.

Los ojos de Chile, del mundo y de la historia, están puestos sobre V.E.

Por tanto,

a V.E. ruego reconsiderar su resolución de hoy y, en mérito de los antecedentes expuestos, acoger el recurso de amparo deducido en estos autos a favor de don Renán Fuentealba Moena.

Patricio Aylwin Azócar